

EN LO PRINCIPAL: Recurso de protección.

PRIMER OTROSÍ: Orden de no innovar.

SEGUNDO OTROSÍ: Acreditan personería.

TERCER OTROSÍ: Acompañan documentos.

CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena

FRANCISCO HERNÁN RIVERA RIVERA, abogado, y doña **CAROLINA ANDREA CHACÓN URRUTIA**, abogado, ambos con domicilio en La Serena, calle Colón Nº 352, oficina 210, en representación, según se acreditará, de don **RODRIGO ANTONIO IRIBARREN MORDOJ**, médico cirujano, cédula nacional de identidad Nº 8.790.108-4, domiciliado en Lote diez, Condominio La Cebada Uno, ex Fundo Loreto, sector Altovalsol, La Serena; don **RICARDO SCHMIDT CARRAMIÑANA**, geólogo, cédula nacional de identidad Nº 7.681.944-0, domiciliado en Lote veinticinco, Condominio La Cebada Uno, ex Fundo Loreto, sector Altovalsol, La Serena; don **CARLOS RAMÓN SILVA SEPÚLVEDA**, asistente social, cédula nacional de identidad Nº 7.163.837-5, domiciliado en Lote veintinueve, Condominio La Cebada Uno, ex Fundo Loreto, sector Altovalsol, La Serena; doña **ROSSANA WALDA CALABRESE ARACENA**, artesana, cédula nacional de identidad número Nº 9.634.360-4, domiciliada en Lote treinta y dos, Condominio La Cebada Uno, ex Fundo Loreto, sector Altovalsol, La Serena; y de la persona jurídica denominada **LOPEZ Y ZALAQUETT SERVICIOS MÉDICOS, COMERCIALES Y AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, rol único tributario Nº 78.473.340-8, representada por don **NÉSTOR ALEJANDRO LÓPEZ PÉREZ**, médico, cédula nacional de identidad Nº 4.046.698-3, ambos con domicilio en Lote trece, Condominio La Cebada Uno, ex Fundo Loreto, sector Altovalsol, La Serena, **a Su Señoría Ilustrísima respetuosamente decimos:**

En ejercicio del mandato judicial que conducimos y en la representación que ostentamos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y encontrándonos dentro del plazo que establece el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, y a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación exponemos, **interponemos recurso de protección** en contra de doña **VERONICA ALEJANDRA MARTINEZ MEZA**, contador auditor, cédula nacional de identidad Nº 14.532.594-3, domiciliada en Lote 38, Condominio La Cebada I, sector Altovalsol, Ex Fundo Loreto, La Serena; de don **RAFAEL IZQUIERDO PÉREZ DE ARCE**, ignoramos profesión u oficio, cédula nacional de identidad Nº 8.208.728-1, domiciliado en Lote 26,

Condominio La Cebada I, sector Altovalsol, Ex Fundo Loreto, La Serena; de doña **ROSA LIDIA DEL CARMEN ZÚÑIGA VÁSQUEZ**, educadora de párvulos, cédula nacional de identidad Nº 5.859.773-2, domiciliada en Parcelas 3 y 4 Condominio El Angelino, sector Altovalsol, Ex Fundo Loreto, La Serena; y en contra de don **JORGE RONALD REYES MÜLLER**, Ingeniero civil mecánico, cédula nacional de identidad Nº 11.476.979-7, domiciliado en Lote 23, Condominio La Cebada I, sector Altovalsol, Ex Fundo Loreto, La Serena; en razón de que con sus conductas han afectado de manera arbitraria e ilegal nuestras garantías constitucionales, en especial la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, el derecho de propiedad, y el derecho a la vida, particularmente a la integridad física y síquica y a la sus familias, consagradas en el artículo 19 Nºs 23, 24 y 1, respectivamente, con el propósito de que este Ilustrísimo Tribunal, conociendo del Recurso, ordene restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los derechos conculcados, disponiendo las medidas que se señalarán en la parte petitoria de este libelo o las que SS.I. juzgue necesarias.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Que, nuestros representados, como se acredita mediante los certificados de dominio vigentes emitidos por el Conservador de Bienes Raíces de La Serena, acompañados en el tercer otrosí de esta presentación, **son dueños de distintos inmuebles o lotes, ubicados todos en el denominado Condominio La Cebada Uno, Ex Fundo Loreto, en el sector de Altovalsol, ciudad de La Serena, más sus correspondientes acciones de aguas**, y que corresponden a los lotes que están señalados como sus domicilios en esta presentación. A saber, don **RODRIGO ANTONIO IRIBARREN MORDOJ**, es dueño del Lote 10; don **RICARDO SCHMIDT CARRAMIÑANA**, es dueño del Lote 25; don **CARLOS RAMÓN SILVA SEPÚLVEDA**, es dueño del Lote 29; doña **ROSSANA WALDA CALABRESE ARACENA**, es dueña del Lote 32; y la persona jurídica denominada **LOPEZ Y ZALAQUETT SERVICIOS MÉDICOS, COMERCIALES Y AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, es dueña de los Lotes 12 y 13.

2.- Que, a estas alturas, son de público conocimiento los conflictos entre algunos vecinos del condominio referido y la persona jurídica denominada **“ADMINISTRACIONES ALTOVALSOL SPA.”**, dueña de ciertos bienes del Condominio La Cebada Uno, que sirven para el uso común de los propietarios de los distintos lotes que lo conforman, entre los cuales se encuentra una planta de tratamiento de agua potable. Esencial y resumidamente, la disputa que existe entre ellos se centra en la propiedad de derechos de agua, instalaciones técnicas, el tratamiento y distribución de agua potable dentro del Condominio La Cebada Uno, lo que se ha traducido principalmente en el NO pago de gastos comunes por parte de gran parte de los vecinos, como respuesta a las actividades que pretende desarrollar **“ADMINISTRACIONES ALTOVALSOL SPA.”**, para la

administración del condominio, por cuanto es esta última la encargada de dicha gestión. Además, los vecinos que obran en esta vía se han reunido en el autodenominado “Comité de Administración”, acordándose por estos la negativa a la iniciativa de **“ADMINISTRACIONES ALTOVALSOL SPA.”**, de instalar medidores de agua individuales para cada inmueble, que como es obvio, determinarían el consumo de cada predio y el valor a pagar para cada uno de los mismos. La citada disputa trajo consigo la suspensión del suministro de agua potable por parte de **“ADMINISTRACIONES ALTOVALSOL SPA.”**, tanto de los vecinos que rechazaron la instalación referida, así como de aquellos que se pronunciaron a favor, como es el caso de nuestros representados, por existir una única red de agua que no permite distribución diferenciada y que en consecuencia afecta a todos. La situación brevemente descrita ha perjudicado gravemente a nuestros representados, por cuanto como resulta lógico, se han visto privados del vital elemento, lo que genera todo tipo de consecuencias prácticas.

Pues bien, nuestros representados difieren de la interpretación legal de los demás vecinos, en relación con la propiedad del agua, su potabilización, tratamiento y distribución, entendiendo los recurrentes, que el hecho de ser dueños de acciones de aguas, no los exime del pago de gastos comunes, producidos por la operativa necesaria para el tratamiento y distribución de agua **convertida** en potable, dentro del condominio, entre otros gastos, por ejemplo, lo que se derive de la gestión de la basura que se genera en el condominio.

3.- Que, nuestros representados, como vecinos disidentes de los argumentos de aquellos asociados a través de la figura del “Comité de Administración”, se reunieron en busca de consensos y sobre todo de una solución alternativa, que permitiera responder a la urgente necesidad de contar con un elemento tan vital como el agua. Por ello, se contactaron con **“Inversiones Loreto SPA.”**, a la sazón dueña del camino interior del Condominio La Cebada Uno, según consta del plano de subdivisión agregado bajo el Nº 76, al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2002, el cual se encuentra anotado marginalmente en la inscripción de fojas 74 vuelta, bajo el Nº 76, en el Registro de Propiedad del citado Conservador, correspondiente al año 1957. Así, mediante instrumento privado autorizado ante la Notaría servida por don Oscar Fernández Mora, con fecha 12 de noviembre último, **“Inversiones Loreto SPA.”** y nuestros representados, firmaron un documento que denominaron **“Autorización de Construcción e Instalación de Red de Agua Loteo La Cebada Ex Fundo Loreto”**, con la finalidad de construir, instalar y adquirir el dominio de una red privada de agua en el Loteo Cebada I, Ex Fundo Loreto, para beneficiar a los inmuebles de los que son propietarios, así como el de cualquier otro que quisiera sumarse a esta iniciativa, el que a su vez se conectaría a la planta de tratamiento y red administrada por **“ADMINISTRACIONES ALTOVALSOL SPA.”**, garantizando de esa forma para sus inmuebles,

el adecuado funcionamiento y obtención de una red de agua potable, sin depender de las vicisitudes a las que están expuestos producto de la disputa que existe entre un gran número de vecinos y **“ADMINISTRACIONES ALTOVALSOL SPA.”**. Por último, una vez finalizada las labores en cuestión, **“Inversiones Loreto SPA.”** constituiría servidumbre de acueducto y de tránsito, voluntaria y gratuita, a favor de los lotes de propiedad de mis representados.

4.- Aclaremos a SS.I. que la disidencia a la que nos referimos por parte de nuestros representados, se funda básicamente en que, a diferencia del resto de los vecinos o gran parte de ellos, y particularmente de los recurridos, reconocen y siempre han reconocido su obligación de pagar por potabilización de agua, así como la de contribuir al financiamiento de los gastos que genere el retiro de basura, la mantención vial interior y el servicio de seguridad o portería del Condominio. Reflejo de lo anterior es que nunca, hasta la fecha, han cesado en el pago de los gastos comunes. Sumado a lo anterior, nuestros representados reconocen el objetivo de **“ADMINISTRACIONES ALTOVALSOL SPA.”** dentro del condominio - empresa de la cual para evitar cualquier suspicacia, declaran son accionistas - así como el derecho de dominio de está última sobre instalaciones del sistema de tratamiento y distribución de agua y de los terrenos donde se emplazan los equipos, entre otros bienes, y que en dicha calidad está ampliamente facultada para realizar y encomendar la realización de múltiples labores necesarias para llevar a cabo su misión, las que comprenden entre otras, la contratación de personal y contratación de empresas idóneas para prestar los servicios que no puede ejecutar directamente como el retiro de basura, el mantenimiento de los caminos y la potabilización y distribución de agua.

Sin embargo, el punto de vista de nuestros representados no es ampliamente compartido por los demás vecinos, quienes en el último tiempo se han trenzado en una verdadera lucha judicial con la administradora y otras empresas, a través de la interposición de sendos recursos de protección que a la fecha se encuentran en tramitación ante esta Corte o bien ante la Corte Suprema. (recursos rol: 1119-2018, 1127-2018, 1140-2018, 1161- 2018, 1230-2018, entre otros)

5.- Que, respecto a las disputas judiciales que hemos mencionado, aun cuando esta parte no está de acuerdo con el fondo de ellas, nuestros representados respetan el ejercicio de los derechos que la ley confiere a toda persona, y es por eso que hasta este momento habían mantenido una actitud pasiva frente a sus vecinos, con la vana esperanza de que en algún momento el clima de tensión mejorara, pero como nada de aquello sucedió y se llegó a un punto de nulas posibilidades de dialogo, nuestros representados se reunieron y decidieron buscar una alternativa favorable a sus necesidades, respecto de una tal vital como lo es el acceso al agua, solucionando materialmente la interrupción de suministro de

agua, mientras los demás vecinos desarrollan las instancias judiciales que consideran oportunas, y por ende respetando los derechos de aquellos, pero a su turno, resguardando sus propios intereses o necesidades, sin obstaculizar ni perjudicar los derechos de los demás vecinos, asumiendo como se dijo, a su costa, el valor monetario que involucraban las obras de instalación de esta red.

6.- De esta forma, en virtud de la autorización otorgada por “**Inversiones Loreto SPA.**”, y en ejercicio de su derecho constitucional a la adquisición de toda clase de bienes, consagrado en el artículo 19 Nº 23 de nuestra Carta Fundamental, nuestros representados resolvieron contratar a don Osciell Carrasco Bonilla, a través de una empresa de este, para llevar a cabo las labores necesarias para la construcción de su propia red de agua potable, informando previamente a los demás vecinos del inicio de la obra e invitándolos a participar de la adquisición de una red de agua potable propia.

7.- Así las cosas, se iniciaron las faenas el día 19 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 10:00 a.m., mediante la excavación que la maquina excavadora de marca Waker Neuson efectuó en el camino interior del Condominio La Cebada Uno. Pues bien, la referida excavadora pudo ejecutar sus labores por un lapso no mayor a 40 minutos, ya que aproximadamente a las 10:40 a.m. una serie de vecinos salieron de sus hogares para protestar por la realización de estas obras, entre ellos doña **VERONICA ALEJANDRA MARTINEZ MEZA**, don **RAFAEL IZQUIERDO PÉREZ DE ARCE**, doña **ROSA LIDIA DEL CARMEN ZÚÑIGA VÁSQUEZ**, y don **JORGE RONALD REYES MÜLLER**, quienes posicionaron y estacionaron una serie de automóviles sobre la línea de excavación proyectada, lo que se puede apreciar en acta notarial que se acompaña en otrosí de esta presentación. Los vehículos y sus placas patentes son los siguientes: **Camioneta Ford, modelo Ranger, placa patente DSZW.71**, inscrita a nombre de RAFAEL IZQUIERDO PÉREZ DE ARCE, **Camioneta Mitsubishi, modelo L200, placa patente GLJF.58**, inscrita a nombre de doña ROSA LIDIA DEL CARMEN ZÚÑIGA VÁSQUEZ, **Station Wagon Nissan, modelo X-Trail, placa patente HKHB.71**, inscrita a nombre de VERONICA ALEJANDRA MARTINEZ MEZA, y **Camioneta Maxus, modelo T60, placa patente KTZR.90**, inscrita a nombre de Servicios Mineros R&M SpA., conducida en dicha oportunidad por don JORGE RONALD REYES MÜLLER.

De esta manera, con la instalación a menos de un metro de la máquina singularizada precedentemente, de la **Camioneta Ford, modelo Ranger, placa patente DSZW.71, y luego, de los demás vehículos singularizados precedentemente, se impidió e imposibilitó de manera absoluta que la maquina prosiguiera realizando sus tareas, dado que la obstrucción impedía seguir avanzando.** Además, aunque resulta irreproducible, los actos recién descritos estuvieron acompañados de insultos e improperios respecto de donde se deberían guardar las tuberías que serían utilizadas y de gritos jactándose de no haber

autorizado las faenas en ejecución. Luego, el marido de doña Rossana Walda Calabrese Aracena, don Ariel Enrique Areyuna Santiago, llamó a Carabineros de Chile, quienes acudieron al lugar, exhibiéndose a estos la autorización para la realización de las obras, sin embargo, aludieron que no podían intervenir, por cuanto no estaban facultados para pronunciarse respecto al fondo del conflicto, y en términos prácticos, los insultos eran sólo de índole verbal y no había lesionados, por lo que malamente podían intervenir en los acontecimientos, fuera de llamar a las partes a mantener la calma y no agredirse mutuamente. Luego, siendo las 15:00 horas aproximadamente, advirtiéndome mis representados que no había posibilidades de que la actitud de los recurridos cambiara, se conversó con otros vecinos presentes, quienes alejaron a las personas más ofuscadas, insistiendo los recurridos que no permitirían retomar y menos concluir las obras, por lo que mis representados solicitaron al operador rellenar la excavación hasta ese momento realizada, no con el objeto de desistirse de las obras, sino que con la finalidad de evitar accidentes y problemas posteriores.

En conclusión, nuestros representados han intentado por su propia cuenta y riesgo, a su costa, generar una solución para un problema de vital importancia, como lo es el acceso al agua, mediante un acuerdo totalmente válido con quien es dueño de un inmueble, cuestión que no afecta los derechos de terceros, pero que ha sido imposible realizar, debido a los actos arbitrarios e ilegales de los recurridos, que por medio de acciones que obstaculizan en forma absoluta la materialidad de las obras que se pretenden realizar, conculcan el derecho de nuestros representados, de proveerse a sí mismos, de un bien que les prestará una utilidad manifiesta, evitando la adquisición de la propiedad material e inmaterial de una obra que se pretende construir a su costa y con el consentimiento de aquel que sería el único —el dueño del inmueble— que podría impedir válidamente la generación de una red propia de acceso al agua.

II.- Antecedentes de Derecho.

El Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos mediante la adopción de las medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

En este entendido, el artículo 19 N° 23 del mismo cuerpo legal dispone: *“La libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así...”*.

A su turno el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental dispone: *“La constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.”*

Por su parte, el artículo 19 N°1. Inc. 1 de la Carta Fundamental consagra: *“El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”*.

III.- Ilegalidades y Arbitrariedades.

Que, tal y como lo consagran nuestros Tribunales Superiores de Justicia, una acción arbitraria consiste en un acto o proceder caprichoso, contrario a la justicia, o a las leyes, inicuo, antojadizo, infundado o en último término despótico o tiránico. Por otra parte, una acción o proceder ilegal, es aquel que no está ajustado a derecho, constituyendo dicha disconformidad una infracción al ordenamiento jurídico que lo priva actual o potencialmente de validez.

En este entendido, los recurridos con su actuar han cometido las siguientes arbitrariedades o ilegalidades, perturbando y desconociendo, los legítimos derechos de nuestros representados:

1.- El Derecho de adquirir la propiedad material de redes de agua una vez que estas fueran construidas, estando plenamente facultados para ello, como consecuencia de la autorización que la legítima dueña del inmueble, “Inversiones Loreto SPA.” había entregado a los recurrentes, en relación con el inmueble denominado camino interior, generado producto de la subdivisión del Lote 8, resultante a su vez de la subdivisión de la subdivisión del Fundo Loreto, en donde se emplazaría la red correspondiente.

2.- El Derecho de Propiedad que ejercen nuestros representados sobre los inmuebles de los que son dueños, que se benefician de la conexión a la red de agua, ya que como consecuencia de la interrupción que existe del suministro de agua desde hace casi tres meses, por la negativa y tozuda oposición de los demás vecinos para la instalación de medidores, se ha visto limitada y perturbada la facultad de uso y goce en relación con los inmuebles, por cuanto algunos de los recurrentes han debido dejar sus hogares, sus jardines, lo que ha traído consigo la

muerte de arboles frutales, vegetales, lo anterior sin mencionar siquiera la pérdida del valor comercial o plusvalía de los inmuebles en comento.

3.- Y, por último, no menos importante, el Derecho a la Vida de nuestros representados se ha visto amenazado, particularmente su integridad física y psíquica, la de sus familias, ya que todas las actuaciones agresivas y ofensivas los han situado en un plano de vulnerabilidad y peligro, viviendo constantemente con un justo temor de seguir siendo agredidos personalmente, o de que sus familias sufran algún tipo de represalia, así como también el que sus inmuebles puedan ser dañados.

Por tanto,

En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto por los artículos 19 N°s 1, 23 y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema;

Solicitamos a Su Señoría Ilustrísima, tener por interpuesto recurso de protección en contra de doña **VERONICA ALEJANDRA MARTINEZ MEZA**, don **RAFAEL IZQUIERDO PÉREZ DE ARCE**, doña **ROSA LIDIA DEL CARMEN ZÚÑIGA VÁSQUEZ**, y don **JORGE RONALD REYES MÜLLER**, ya individualizados, admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo; declarando ilegales y arbitrarios los actos ejecutados por los recurridos, por vulnerar las garantías constitucionales consagradas en los artículos 23º, 24º y 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y en definitiva, proceda a reestablecer el imperio del ordenamiento jurídico conculcado por los actos ejecutados por los recurridos precedentemente individualizados, por ser ilegales y arbitrarios, ordenando que los recurridos o cualquier otro tercero, vuelvan a ejecutar actos que impidan o perturben el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que por medio de presente recurso se pretenden cautelar, o bien tomar las providencias que **S.S.I.**, determine para reestablecer y garantizar efectivamente el legítimo ejercicio de los derechos afectados por los recurridos, con costas del recurso.

PRIMER OTROSÍ: En atención al grave e irreversible impacto que causa la ejecución de los hechos precedentemente explicados, ejecutados por los recurridos, singularizados en lo principal de esta presentación, solicitamos a **S.S.I.**, tenga a bien ordenar se decrete **ORDEN DE NO INNOVAR**, respecto de los actos expuestos en lo principal de esta presentación, ordenando en consecuencia que los recurridos no vuelvan a obstaculizar las faenas contratadas para efectos de construir e instalar la red de agua de nuestros representados.

Por tanto,

Solicitamos a Su Señoría Ilustrísima decretar Orden de No Innovar en los términos expuestos precedentemente.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a S.S Ilustrísima, tener por acompañados los siguientes documentos:

1. Certificado de Dominio Vigente Lote 25;
2. Certificado de Dominio Vigente Lote 29;
3. Certificado de Dominio Vigente Lote 32;
4. Certificado de Dominio Vigente Lote 10;
5. Certificado de Dominio Vigente Lotes 12 y 13;
6. Certificado pago gastos comunes;
7. Autorización construcción e instalación de redes de agua loteo La Cebada;
8. Acta Notarial de fecha 19 de noviembre último;
9. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, placa patente KTZR.90 Servicios Mineros R&M SPA.;
10. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, placa patente HKHB.71 Verónica Alejandra Martínez Meza;
11. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, placa patente DSZW.71 Rafael Izquierdo Pérez de Arce;
12. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, placa patente GLJF.58 Rosa Lidia del Carmen Zuñiga Vásquez;

Por tanto,

Solicitamos a Su Señoría, tener por acompañados los documentos precedentemente singularizados.

TERCER OTROSÍ: La personería que nos faculta para actuar en representación de don **RODRIGO ANTONIO IRIBARREN MORDOJ**, don **RICARDO SCHMIDT CARRAMIÑANA**, don **CARLOS RAMÓN SILVA SEPÚLVEDA**, doña **ROSSANA WALDA CALABRESE ARACENA**, y de **LOPEZ Y ZALAQUETT SERVICIOS MÉDICOS, COMERCIALES Y AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, consta en la escritura pública de mandato judicial de fecha 29 de noviembre de 2018, otorgada ante el Notario Público de La Serena, don Rubén Reinoso Herrera. Acompañamos el referido documento **con firma electrónica avanzada, conforme a la ley 19.799, ley 20.886 sobre tramitación electrónica,** y artículo 6° del Código de Procedimiento Civil.

Por tanto,

Solicitamos a Su Señoría Ilustrísima tener por acreditada nuestra personería y por acompañado el referido documento, con citación.

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a Su Señoría tener presente que asumimos el patrocinio de las personas por quienes comparecemos, en nuestras calidades de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con las facultades que constan en el mandato judicial que acompañamos en el tercer otrosí de esta presentación.

Por tanto,

Solicitamos a Su Señoría Ilustrísima tenerlo presente.